**Carencia actual de objeto de la acción popular al haber sido superada la situación que vulnera el derecho colectivo vulnerado.**

**Síntesis del caso:** *Se presenta la vulneración de derechos colectivos con la instalación de una antena de telefonía móvil en el barrio Malabar de Manizales.*

**ACCIÓN POPULAR / Goce de un medio ambiente sano / ESPECTRO ELECTROMÁGNETICO / Servicios Públicos de Telecomunicaciones y de Telefonía Celular / AFECTACIÓN A LA SALUD / Servicio de Telefonía Celular / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.**

**Problema jurídico:** ¿Si se está en presencia de una carencia de objeto por haber sido superada la vulneración al no estar la antena y la Sociedad COMCEL SA manifestó que no era su voluntad instalar la antena por la oposición de la comunidad?, o si por el contrario

¿Se vulneran los derechos colectivos de los habitantes del barrio Malabar de la ciudad de Manizales, Caldas, por la adecuación para la instalación de la antena de telecomunicaciones, teniendo en cuenta que la misma no cumple con las normas establecidos para ello, además de aumentar los problemas de salud del que padecen las familias de dicho sector?

**Tesis: “**Las acciones populares son un mecanismo constitucional efectivo para hacer prevalecer los derechos colectivos de los particulares ante las entidades del Estado, cuando se demuestre la vulneración o riesgo de los mismos, que garantizan su protección como herramienta de intervención social. Las acciones populares son por naturaleza acciones de derechos humanos y no de litis, pues su objetivo no es buscar la solución de una controversia entre dos partes sino cesar la lesión o amenaza contra un derecho colectivo que afecta potencialmente a un gran número de personas. De allí, su espíritu preventivo.

Los preceptos constitucionales en defensa de los derechos colectivos y del medio ambiente se encuentran consagrados en el artículo 78 y 79 de la Constitución Política, que brindan a los ciudadanos el goce de ambiente sano, la calidad de los servicios prestados a la comunidad que no atenten contra su salud. De otro lado, el numeral 6 del artículo 1º de la Ley 99 de 1993, establece los principios generales ambientales, entre ellos, el principio de precaución, de acuerdo con el cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no podrá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. De los preceptos normativos y jurisprudenciales, se extrae que por regla general los servicios de telefonía móvil celular se consideran que cumplen con los límites de exposición pertinentes. Sin embargo, en materia de afectación directa al derecho a la salud, deberán tomarse las precauciones necesarias.

La comunidad del barrio Malhabar fueron presentadas diferentes quejas ante las entidades demandadas, por el intento de adecuación de una antena de telecomunicaciones por la Sociedad COMCEL SA bajo la marca CLARO, en una vivienda del barrio, por la presunta afectación a la salud de los habitantes. La Secretaría de Planeación del Municipio de Manizales mediante oficio del 1 de abril de 2014, expidió concepto de viabilidad para la instalación de una Estación Base, solicitada por Asesores Externos de Comcel S.A.; sin embargo al observar por parte del Grupo de Control Físico Urbanístico, una presunta infracción de la norma urbanística en el inmueble vinculado a la instalación de la antena, le fue suspendido el concepto de viabilidad, por no contar con la licencia urbanística de construcción que autorice la modificaciones arquitectónicas y estructurales del predio en cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto 1469 de 2010 y 195 de 2005.

En el anterior contexto fáctico y probatorio, es claro que en el presente asunto, aparece acreditado la configuración del fenómeno relacionado con la carencia actual de objeto por hecho superado, sin perjuicio que se pueda presentar una nueva acción popular, y se declarará probada esta excepción propuesta por COMCEL SA”.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**RAMA JUDICIAL**

**HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS**

**Sala de Decisión**

**Magistrado Ponente: Publio Martín Andrés Patiño Mejía**

Manizales, once (11) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

**ASUNTO: SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA**

**ACCIÓN: POPULAR**

**DEMANDANTE: ALEJANDRA LARGO GIRALDO**

**DEMANDADOS: MUNICIPIO DE MANIZALES – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES - CLARO COLOMBIA S.A.**

**COADYUVANTE: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA**

**RADICADO: 17 001 23 33 000 2014-00383-00**

**SENTENCIA: 090**

Proyecto discutido y aprobado en Sala Extraordinaria de Decisión, según consta en Acta 034 del once (11) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

**ASUNTO**

Se dispone la Sala Sexta de Decisión del Honorable Tribunal Administrativo de Caldas dictar sentencia dentro del proceso de la referencia.

1. **ANTECEDENTES**
   1. **LA DEMANDA (fs. 1 a 7, corregida fs56 a 61 c.1)**
2. Interpretando la demanda, la parte actora pretende que se protejan los derechos colectivos al goce del ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, seguridad y salubridad públicas, la prevención de desastres previsibles técnicamente, la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, y los derechos de los consumidores (Ley 472 de 1998, art. 4º lit. a, c, g, h, i, m, y n)[[1]](#footnote-1), para que se disponga que el Municipio de Manizales adopte las medidas necesarias para evitar la vulneración de los derechos colectivos invocados, como también se ordene a la empresa Claro Colombia la instalación de las redes de telefonía a una distancia que atienda a las recomendaciones técnicas, científicas y administrativas en una zona permitida, para evitar los problemas presentados a los habitantes ubicados en la carrera 40 calle 68 A, del barrio Malabar de Manizales, por la instalación de una antena de telefonía móvil en la terraza de una vivienda de dicho barrio.
3. Afirmó que la Empresa de Telefonía móvil Claro, está adecuando la terraza de una vivienda del barrio Malabar de la ciudad de Manizales para la instalación de una antena de telefonía, sin licencia de construcción, con concepto de viabilidad SPM 14-3273 del 12 de septiembre de 2014 de la Secretaría de Planeación, en contravención de las normas del RETIE y del Plan de Ordenamiento Territorial que ordena la colocación a más de 60 metros de las viviendas, colegios, hospitales geriátricos y parques, sin socialización ni estudio previo de las circunstancias de los habitantes del sector, donde algunas personas padecen de afectaciones de salud como intervenciones quirúrgicas y quimioterapias, exponiendo a la comunidad a la radiación de campos electromagnéticos, el almacenamiento de combustibles, las operaciones de motores, como posible colapso de una torre por tempestad o sismo, generando riesgos e impactos en la salud, contaminación visual y auditiva.
   1. **COADYUVANCIA (fls. 74, 115-116, C1)**
4. El 19 de noviembre de 2014 el señor Javier Elías Arias Idarraga solicitó se le tuviera por coadyuvante y pidió la nulidad del numeral quinto del auto admisorio sobre las publicaciones en el portal web de la Rama Judicial. Mediante auto del 19 de noviembre de 2015, la Magistratura admitió la solicitud de intervención como coadyuvante al señor y negó su solicitud de nulidad.
   1. **CONTESTACIONES DE LA DEMANDA**
      1. **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL: /fls. 127 – 142, C1/**
5. En escrito allegado del 15 de diciembre de 2015, describió que no tiene injerencia en los hechos y pretensiones aludidos en la demanda, pues conforme a sus competencias le corresponde administrar el espacio aéreo y garantizar la seguridad de las aeronaves.
6. Precisó que para las construcciones que impliquen altura la entidad, se limita a emitir un concepto para que no constituyan un obstáculo para las operaciones aéreas, específicamente la reglamentación RAC 14 que prohíbe nuevos objetos dentro de la distancia de 3000 m del borde interior o encima de la superficie de transición de aeródromos, aeropuertos y helipuertos.
7. En cuanto a las pretensiones manifestó que ninguna se relaciona con la entidad ni depende su éxito de ésta; y transcribe información relacionada con la exposición a campos magnéticos y los riesgos a la salud.
8. Formuló la excepción de ilegitimidad en la causa por activa y por pasiva, sustentada en que la entidad no otorga permiso para la construcción de antenas.
   * 1. **MUNICIPIO DE MANIZALES /fl. 148-172 c1/.**
9. Contestó de manera extemporánea la demanda conforme a la constancia secretarial visible a folio 320, C. 1A.
   * 1. **MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES /fl. 183 – 195. C1/**
10. Contestó de manera extemporánea la demanda conforme a la constancia secretarial visible a folio 320, C. 1A.
    * 1. **SOCIEDAD CLARO COLOMBIA SA /FLS. 254 – 278, C1/**
11. Aclaró que no existe la persona jurídica “Claro Colombia SA”, atendiendo que es una marca comercial de propiedad del grupo empresarial del cual forma parte Comcel S.A. y Telmex Colombia S.A., por lo que carece de capacidad para demandar o ser demandada.
12. Sin embargo, se pronunció frente a los hechos de la demanda, indicando que las antenas de telecomunicaciones no producen las supuestas consecuencias gravosas denunciadas en la demanda, ya que el Decreto 195 de 2005 y la Resolución 1645 de 2005 regulan esta actividad, y para los servicios de telecomunicaciones no se requieren mediciones ni presentación de declaración de conformidad electromagnética. Agregó que las instalaciones se hacen en cumplimiento de la legislación. En lo demás, hizo hincapié que en la dirección carrera 40 68ª-02 no existe alguna antena y no le constan los hechos particulares de la comunidad.
13. Se opuso a las pretensiones por no ser responsable de la violación de los derechos colectivos invocados y propuso las excepciones de: carga de la prueba que le incumbe al actor; improcedencia de la acción popular por la ausencia de pruebas que permitan demostrar que los equipos generan efectos adversos sobre la salud mental; existe interés público en los servicios de telefonía Móvil Celular; el espectro electromagnético no es peligroso en sí; no hay un supuesto daño a la salud; el principio de precaución y prevención se manifiesta en el Decreto 195 de 2005; hecho superado por que en la dirección denunciada en la demanda no hay alguna antena; improcedencia de la acción por los argumentos de la contestación; y la acción popular no cumple la finalidad porque no existe un daño contingente, ni peligro o amenaza a los Derechos Colectivos.

* 1. **PACTO DE CUMPLIMIENTO. (fl. 325 vto – 346 a 348 c1).**

1. En audiencia del día 25 de noviembre de 2016, se ordenó fijar nuevamente fecha de pacto de cumplimiento llevándose a cabo el día 27 de febrero de 2017, sin que se llegara a un acuerdo por las partes, y se declaró fallida esta instancia. Se anota que en la audiencia se dejó claro que la antena motivo de la acción popular no iba a ser instalada, si bien se inició el proceso de su instalación, fue desistida debido a la oposición de la comunidad (cd. Grabación 2 Minutos 2:35 a 3:45).
2. El 23 de marzo de 2017 se ordenaron los medios probatorios, teniendo como tales los documentos allegados, negándose la inspección por la manifestación que hicieron las partes en la audiencia que la antena no se había colocado y se dispuso dar traslado a los alegatos (fls. 349 a 350 c.1 A)
   1. **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN E INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO**
3. Presentaron alegatos de conclusión Comcel SA -Claro Colombia-, y la Aeronáutica Civil, las demás partes y el Ministerio Público no presentaron alegatos.
4. **Parte Accionada – Comunicación Celular SA Comcel SA (Claro Colombia) (fls. 364 – 373 C1A):** Adujo los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
5. **Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil\fl. 375 - 376, C1A\.** Esbozó que la única participación de la entidad en los trámites de construcciones en altura es un concepto de altura que emite, el cual no constituye permiso de construcción, con la intención de no afectar el desarrollo seguro de la aviación.
6. Luego de varios recursos, solicitudes de nulidad y escritos presentados por el coadyuvante, el proceso entró a Despacho para sentencia el 19 de septiembre de 2017.
7. **CONSIDERACIONES**
   1. **Cuestiones Previas**
8. Procede la Sala a pronunciarse sobre los argumentos esgrimidos por la sociedad Comunicación Celular SA- Comcel SA, al indicar la inexistencia de la persona jurídica de Claro Colombia SA, dado que es una marca comercial de propiedad del grupo empresarial del cual forman parte, entre otros, COMCEL SA y TELMEX COLOMBIA SA, por tanto CLARO carecería de capacidad para demandar o ser demandada al no ser titular de derechos y obligaciones.
9. Se avista que la notificación del auto admisorio de la demanda fue hecha mediante aviso por la Secretaría de la Corporación, el día 12 de octubre de 2016, dirigido al Representante Legal de Claro Colombia SA (f. 245 c.1).
10. Teniendo en cuenta que CLARO se trata de de una marca, el cual no funge como personería jurídica, para ser demandado, se podría inicialmente advertir un vicio de nulidad procesal consagrada en el artículo 133.4 del CGP: “*Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.*”[[2]](#footnote-2)
11. No pasa por alto la Sala que COMCEL SA, a través de su asesor externo Consultores Unidos Asociados, fue la que solicitó a la Alcaldía de Manizales el concepto de viabilidad a la instalación de una celda portátil con un mástil de 8 m de altura para un sistema de telefonía celular en la Calle 68 A 40-03 del barrio Malabar, y que fue concedido por la Secretaría de Planeación mediante oficio SPM 14-1122 del 1º de abril de 2014 (f. 49 c.1).
12. Para ello se trae a colación que el artículo 162 de la  Decisión 486 de la Comunidad Andina precisa: “*El titular de una marca registrada o en trámite de registro* ***podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva****.*”[[3]](#footnote-3)
13. Al revisar la documentación de la contestación de la demanda (fs. 254 a 273 c.1) aparece que COMCEL SA utiliza la marca CLARO, por lo que se infiere que tiene licencia para explotar ésta.
14. Si bien, la notificación se realizó por un aviso dirigido a Claro Colombia, en la contestación de la demanda funge con calidades de representar los intereses de la marca CLARO, y aclarado que COMCEL SA es la directamente interesada en la colocación de la antena, puede fungir como demandada, y es aceptable que proceda a contestar la demanda y a proponer excepciones.
15. Adiciona la Sala que la sociedad tenía conocimiento del contenido de la demanda, por tanto si no se entiende que fue notificada de forma personal con su razón social, sí tenía facultades para el uso de la marca CLARO, y debe entenderse que se notificó correctamente a la demandada, o por lo menos por conducta concluyente, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 301 del CGP, el cual preceptúa: *“ (…)Cuando una parte o un tercero manifiesten que conoce determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda registro de ello, se considerará notificada por conducta concluyente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la manifestación verbal”.[[4]](#footnote-4)*
    1. **Competencia**
16. El estudio de esta decisión corresponde a este Foro, a voces del artículo 16 de la Ley 472 de 1998[[5]](#footnote-5).
17. En cuanto a la composición de la Sala, se encuentra que el 21 de noviembre de 2014 los Doctores WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, AUGUSTO MORALES VALENCIA y CARLOS MANUEL ZAPATA JAIMES se declararon impedidos (f. 76 c.1), los cuales fueron aceptados por auto del 11 de diciembre de 2014 por el Honorable Consejo de Estado (fs. 93 a 98 c.1). A su vez, la Magistrada PATRICIA VARELA CIFUENTES y los Magistrados JAIRO ÁNGEL GÓMEZ PEÑA, CARLOS MANUEL ZAPATA JAIMES, AUGUSTO RAMÓN CHÁVEZ MARÍN y AUGUSTO MORALES VALENCIA, se declararon impedidos el 8 de abril de 2016 (fs. 214 a 215 c.1), y por auto del 22 de agosto de 2016, la Sala de Decisión del Doctor LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA encontró que los impedimentos de los Doctores WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, AUGUSTO MORALES VALENCIA y CARLOS MANUEL ZAPATA ya habían sido decididos por el Honorable Consejo de Estado, en tanto que negó el impedimento de los demás, incluido el Doctor JAIRO ÁNGEL GÓMEZ PEÑA (fs. 230 a 232 c.1).
18. Por lo anterior, la presente Sala de Decisión está conformada por el Doctor JAIRO ÁNGEL GÓMEZ PEÑA y el ponente PUBLIO MARTÍN ANDRÉS PATIÑO MEJÍA.
    1. **De las Excepciones que enervan la acción**
19. Con referencia a la excepción propuesta por la entidad AEROCIVIL de falta de legitimidad en la causa por pasiva, considera la Sala que la misma no tiene vocación de prosperar, atendiendo que el Decreto 195 de 2005[[6]](#footnote-6), que regula la instalación de estaciones radioeléctricas, en el parágrafo primero del artículo 16 le otorga la competencia de otorgar el permiso de instalación de las Estaciones Radioeléctricas.
20. En torno a las excepciones de improcedencia de la acción propuestas por COMCEL SA, éstas abordan la ausencia de pruebas que la inculpen, lo que forma parte del fondo del asunto, y se decidirán más adelante.
21. Igual estudio posterior se hará con las demás excepciones de fondo.
    1. **PROBLEMAS JURÍDICOS**
22. Le corresponde a la Sala determinar la presunta vulneración alegada por la parte actora, por lo que los problemas jurídicos a resolver son:
    1. ¿Si se está en presencia de una carencia de objeto por haber sido superada la vulneración al no estar la antena y la Sociedad COMCEL SA manifestó que no era su voluntad instalar la antena por la oposición de la comunidad?, o si por el contrario
    2. ¿Se vulneran los derechos colectivos de los habitantes del barrio Malabar de la ciudad de Manizales, Caldas, por la adecuación para la instalación de la antena de telecomunicaciones, teniendo en cuenta que la misma no cumple con las normas establecidos para ello, además de aumentar los problemas de salud del que padecen las familias de dicho sector?
    3. **LO DEMOSTRADO EN EL PROCESO**
23. Mediante las peticiones del demandante[[7]](#footnote-7) en el mes de agosto y septiembre de 2014 dirigidos al Municipio de Manizales, a la Aeronáutica Civil, a Claro Colombia y al Ministerio de Tecnologías y de la Información y las Comunicaciones, se pidió la adopción de medidas administrativas y presupuestales, con el fin de cesar la vulneración de los derechos colectivos de los habitantes del barrio Malabar en la ciudad de Manizales, como consecuencia de la adecuación para la instalación de la antena de telefonía móvil en la terraza de una vivienda de dicho barrio, por parte de la Sociedad Claro Colombia; así como ordenarle el cumplimiento de las recomendaciones técnicas, científicas y administrativas, teniendo en cuenta el estado de salud de los habitantes del sector.
24. Mediante oficios del 28 de agosto y 23 de septiembre de 2014, la DEFENSORÍA DEL PUEBLO puso en conocimiento a CLARO COLOMBIA la queja presenta por los habitantes del barrio Malhabar, además de requerirle información detallada referente a la instalación. (fl. 20, 29 C1).
25. Escrito SPM 14-3273 suscrito por la Secretaría de Planeación del Municipio de Manizales, que informó a la señora Yenni Alejandra, habitante del barrio Malabar, sobre reglamentación del Ministerio de Comunicaciones respecto a sobre los límites para la exposición de personas a campos electromagnéticos, así mismo las normas urbanísticas y arquitectónicas para la instalación de infraestructura de los sistemas radioeléctricos de telefonía móvil celular. (fs. 31-32, C1).
26. En oficio del 30 de septiembre de 2014, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, relacionó a la accionante la normatividad concerniente a la instalación, autorización, y reglas distancia y alturas para la instalación de antenas transmisoras, así como los estudios realizados respecto a la seguridad de la vida humana por la exposición a las antenas. (fl. 24- 25 vto, C1).
27. Oficio VC 002403 del 30 de septiembre de 2014, en el cual la Agencia Nacional del Espectro, expuso a la demandante los preceptos legales contenidos en el Decreto 195 de 2005 y la Resolución 1645 de 2005, según los cuales las emisiones de fuentes inherentes conformes (telefonía móvil celular), son de baja frecuencia, no afectan la estructura atómica y molecular de los tejidos vivos, por tanto los campos electromagnéticos cumplen con los límites de exposición pertinentes. (fs.26- 27 vto).
28. Oficio SPM 3355-14 del 17 de septiembre de 2014, dirigido a la Inspección de Control Urbano, en el cual consta la visita técnica de Control Físico Urbanístico realizada al inmueble del señor Saúl Antonio Mazo Correa, donde se pone en conocimiento que el inmueble con ficha catastral **01-02-0052-0015-00** de Manizales no cuenta con ninguna licencia de construcción en las modalidades de reforzamiento estructural o modificación; con el fin de iniciar las acciones administrativas correspondientes. (21 – 23, C1).
29. Oficio SPM 14-1122 del 1 de abril de 2014 (f. 49 c.1) por el cual la Secretaría de Planeación del Municipio de Manizales dio concepto de viabilidad a Consultores Unidos Asociados – Asesores Externos Comcel SA, para la ubicación de una Estación Base con dos mástiles de cuatro (4) metros en el predio de identificación con la ficha catastral **1-02-0052-0015-000**, previo cumplimiento de los requisitos de ley.
30. Informe de patología expedido por el Instituto Caldense de Patología, en el cual se describe los datos clínicos del paciente José Emerson Zuleta Patiño. (fl. 11-12, C1). Y la historia clínica 10212478, donde se describe las afecciones cardiacas del paciente Luís Ángel Villada. (fl. 30, C1)
    1. **MARCO DOGMÁTICO**
31. Los imperiales interdictos[[8]](#footnote-8) romanos para la protección de peligros públicos, fueron heredados del Code napoleónico por el Bicentenario Código Civil[[9]](#footnote-9) en los artículos 1005, 1006, 2359 y 2360, a favor de los caminos, plazas y otros lugares de uso público, para la seguridad de los que transitan por ellos; igualmente para los casos de daño contingente, por imprudencia o negligencia que amenace a personas indeterminadas. Empero, la actual tendencia colectiva tiene su fuente más próxima en los movimientos civiles iniciados en la década de 1960’s, que obligaron en Estados Unidos a reconocer que podían existir procesos vinculantes a personas diferentes de las partes, así como iniciaron la preocupación en una serie de juristas italianos convocados en el Congreso de Pavia, entre ellos DENTI, CAPPELLETTI, PROTO PISANI, VIGORTTI, TROCKER, que postularon la necesidad del cambio en la concepción del Derecho de Acceso a la Justicia, para vencer los diversos obstáculos a amplios grupos de personas y la decisión de los intereses difusos, pues los mecanismos vigentes hasta el momento no permitían ejercerlos, sino a nivel individual con elevados costos. Entre estos mecanismos apoyaron los procedimientos judiciales para pequeños daños a grandes masas colectivas, que en forma individual serían improcedentes, pero reportaban grandes ganancias a grupos económicos. Así mismo ayudó la mitológica construcción de las tres generaciones de Derechos Humanos, atribuidas a Karel Vasak en su discurso inspirado en las cualidades de los colores de la bandera de Francia: libertad, igualdad y fraternidad-solidaridad.
32. El artículo 88[[10]](#footnote-10) de la Constitución Política consagra las acciones populares cuya reglamentación se encuentra en la Ley 472 de 1998[[11]](#footnote-11), como mecanismos legales para la protección de derechos e intereses colectivos cuando estos resulten amenazados o vulnerados, y no para dirimir conflictos entre dos partes en torno a derechos individuales, como lo estableció la Honorable Corte Constitucional[[12]](#footnote-12), que enfatizó su finalidad pública y el carácter preventivo.

1. Las acciones populares pretenden la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro, agravio o daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares que actúen en desarrollo de funciones administrativas.
2. Se caracterizan por poseer un carácter altruista, ya que se busca que la comunidad afectada disponga de un mecanismo jurídico para la rápida y sencilla protección de los referidos derechos, cuya amenaza o vulneración, así como la existencia del peligro, agravio o daño contingente, deben probarse necesariamente para la procedencia del amparo.
3. Por su parte, el Honorable Consejo de Estado[[13]](#footnote-13), puntualizó los supuestos sustanciales requeridos para la procedencia de las acciones populares: *A) Una acción u omisión de la parte demandada. B) Un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno la que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana. Y, C) La relación de causalidad entre la acción, la omisión, y la señalada afectación de los referidos derechos e intereses.*
4. Las acciones populares son un mecanismo constitucional efectivo para hacer prevalecer los derechos colectivos de los particulares ante las entidades del Estado, cuando se demuestre la vulneración o riesgo de los mismos, que garantizan su protección como herramienta de intervención social.
5. Las acciones populares son por naturaleza acciones de derechos humanos y no de litis, pues su objetivo no es buscar la solución de una controversia entre dos partes sino cesar la lesión o amenaza contra un derecho colectivo que afecta potencialmente a un gran número de personas. De allí, su espíritu preventivo.
   * 1. **ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO - SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y DE TELEFONÍA CELULAR – CONDICIONES URBANÍSTICAS DE AUTORIZACIÓN**
6. El mandato contenido en el artículo 75[[14]](#footnote-14) constitucional establece que el espectro electromagnético es un bien público inajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado.
7. Por su parte la Ley 37 de 1993, en su artículo 1[[15]](#footnote-15) define el servicio de telefonía móvil celular como “(…) *un servicio público de telecomunicaciones, no domiciliario, de ámbito y cubrimiento nacional, que proporciona en sí mismo capacidad completa para la comunicación telefónica entre usuarios móviles y, a través de la interconexión con la red telefónica pública conmutada (RTPC), entre aquellos, y usuarios fijos, haciendo uso de una red de telefonía móvil celular, en la que la parte del espectro radioeléctrico asignado constituye su elemento principal.”*
8. A su vez el Decreto 741 de 1993[[16]](#footnote-16), definió los criterios para la prestación del servicio público de telefonía celular, el establecimiento, instalación y operación de sus redes y el procedimiento para otorgarlo en concesiones. Respecto al régimen de prestación del servicio en el artículo 19 ibídem, prescribió: *“(…) El servicio de telefonía móvil celular está a cargo de la Nación. Por tratarse de un servicio de ámbito y cubrimiento nacional, la telefonía móvil celular está a cargo de la Nación y por lo tanto no requiere para su concesión autorización alguna de las entidades territoriales. Compete al Ministerio de Comunicaciones la planeación, regulación, control y la concesión del servicio. (…)”*
9. De otro lado la Ley 1341 de 2009, en su artículo 4,[[17]](#footnote-17) estableció las obligaciones por parte del Estado, con el fin de prestar de forma adecuada los servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones, en esta se preceptúa:

“(…) el Estado intervendrá en el sector las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para lograr los siguientes fines:

1. Proteger los derechos de los usuarios, velando por la calidad, eficiencia y adecuada provisión de los servicios.

2. Promover el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, teniendo como fin último el servicio universal.

(…)

6. Garantizar el despliegue y el uso eficiente de la infraestructura y la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos escasos, se buscará la expansión, y cobertura para zonas de difícil acceso, en especial beneficiando a poblaciones vulnerables.

(…)

8. Promover la ampliación de la cobertura del servicio.

(…)

13. Propender por la construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras de las tecnologías de la información y las comunicaciones por la protección del medio ambiente y la salud pública. (…).

1. En cuanto a la prestación del servicio del espectro radioeléctrico el Decreto 4392 de 2010 prescribe *“(…) El uso del espectro radioeléctrico requiere permiso previo, expreso y otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (…)”.*
2. En lo atinente a la licencia de autorización para intervención del espacio público, para el servicio de telecomunicaciones, el artículo 13 Decreto 1469 de 2010[[18]](#footnote-18) prevé:

“(…) Licencia de intervención del espacio público. Por medio de esta licencia se autoriza la intervención del espacio público para:

a) La construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 142 de 1994 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, las autorizaciones deben obedecer a un estudio de factibilidad técnica, ambiental y de impacto urbano de las obras propuestas, así como de la coherencia de las obras con los Planes de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que los desarrollen o complementen.

Se exceptúa de la obligación de solicitar la licencia de que trata este literal, la realización de obras que deban adelantarse como consecuencia de averías, accidentes o emergencias cuando a demora en su reparación pudiera ocasionar daños en bienes o personas. Quien efectúe los trabajos en tales condiciones deberá dejar el lugar en el estado en que se hallaba antes de que sucedieran las situaciones de avería, accidente o emergencia, y de los trabajos se rendirá un informe a la entidad competente para que realice la inspección correspondiente. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a las sanciones establecidas en la ley.

Los particulares que soliciten licencia de intervención del espacio público en ésta modalidad deberán acompañar a la solicitud la autorización para adelantar el trámite, emitida por la empresa prestadora del servicio público correspondiente. (…)”

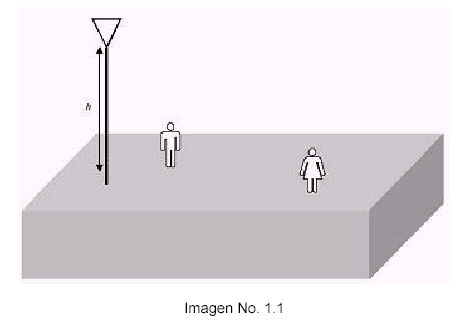
* + 1. **EL DERECHO A LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS**

1. Los preceptos constitucionales en defensa de los derechos colectivos y del medio ambiente se encuentran consagrados en el artículo 78 y 79 de la Constitución Política, que brindan a los ciudadanos el goce de ambiente sano, la calidad de los servicios prestados a la comunidad que no atenten contra su salud.
2. De otro lado, el numeral 6 del artículo 1º de la Ley 99 de 1993[[19]](#footnote-19), establece los principios generales ambientales, entre ellos, el principio de precaución, de acuerdo con el cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no podrá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.
3. En el Decreto 195 de 2005[[20]](#footnote-20) se adoptaron los límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos producidos por estaciones radioeléctricas  en la gama de frecuencias de 9 KHz a 300 GHz, con los lineamientos y requisitos para la instalación de estaciones radioeléctricas en telecomunicaciones.
4. En dicho precepto normativo se atendió la recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT –T K.52 *“Orientación sobre el cumplimiento de los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos", las recomendaciones que la adicionen o sustituyan (…)”.*
5. El artículo 3º ídem adoptó las definiciones técnicas de la UIT, entre ellas que las «*fuentes inherentemente conformes*» son aquellas que producen campos que cumplen los límites de exposición pertinentes a pocos centímetros de la fuente y que no hacen necesarias precauciones particulares.
6. Al respecto señala el parágrafo 2 del artículo 2 “*(…) Las disposiciones de este decreto no aplican para los emisores no intencionales, las antenas receptoras de radiofrecuencia, fuentes inherentemente conformes y los equipos o dispositivos radioeléctricos terminales de usuario. El Ministerio de Comunicaciones definirá las fuentes radioeléctricas inherentemente conformes. (…)-sf-t*
7. El artículo tercero del Decreto en mención, define lo que se entiende por Fuente Inherentemente conforme de la siguiente manera: “(…) *Para efectos del presente decreto y teniendo bases en las definiciones adoptadas internacionalmente por la Unión Internacional en Telecomunicaciones, UIT, se relacionan las siguientes definiciones técnicas: (…)● 3.11 Fuente inherentemente conforme: Son aquellas que producen campos que cumplen los límites de exposición pertinentes a pocos centímetros de la fuente. No son necesarias precauciones particulares. El criterio para la fuente inherentemente conforme es una PIRE de 2W o menos, salvo para antenas de microondas de apertura pequeña y baja ganancia o antenas de ondas milimétricas cuando la potencia de radiación total de 100 mW o menos podrá ser considerada como inherentemente conforme. (…)”-sft-*
8. La Resolución 001645 de 2005[[21]](#footnote-21), que reglamentó el Decreto 195 de 2005, definió el porcentaje de mitigación en caso de superación de los límites máximos de exposición. En el artículo 2° se adoptaron los modelos de categorías de accesibilidad, en concordancia con la Recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT-T K, así:

“(…)

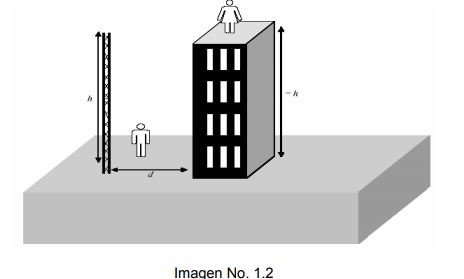
 Categoría de accesibilidad 1:

Cuando la antena se encuentra instalada en una estructura (torre o mástil), inaccesible al público en general, el centro de radiación está ubicado a una altura h sobre el nivel del suelo (h > 3m). La siguiente figura muestra un ejemplo de esta categoría:



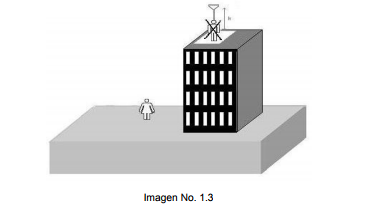
▪ Categoría de accesibilidad 2:

Cuando la antena se encuentra instalada al nivel del suelo, el centro de radiación está a una altura h sobre el nivel del suelo y exista un edificio adyacente o una estructura accesible al público en general, a una distancia d, de la antena. La siguiente figura muestra un ejemplo de esta categoría:

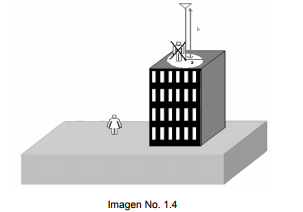


▪ Categoría de accesibilidad 3a:

Cuando la antena está instalada en una estructura (edificio) a una altura h (h > 3m) con respecto a la azotea, el único acceso admisible es para la zona ocupacional, que representa una geometría rectangular típicamente, y cuyos elementos radiantes pueden estar sostenidos por un mástil al borde de la estructura física. La siguiente figura muestra un ejemplo de esta categoría:

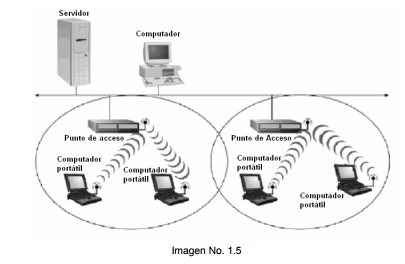


▪ Categoría de accesibilidad 3b:

Cuando la antena está instalada en una torre encima de una estructura (edificio) a una altura h con respecto a la azotea del edificio. El único acceso admisible es para la zona ocupacional que representa una geometría circular típicamente. La siguiente figura muestra un ejemplo de esta categoría:

▪ Categoría de accesibilidad 4:

Cuando el elemento radiante está instalado en un recinto cerrado donde el centro de radiación está a una altura h del suelo. Esta categoría aplica típicamente para redes LAN inalámbricas. El propósito de estos dispositivos es cubrir áreas confinadas por estructuras físicas. La siguiente figura muestra un ejemplo de esta categoría:



(…)”

1. El artículo 3° de la citada, definió a los emisores de los servicios de telefonía móvil celular como fuentes inherentes conformes:

«Artículo 3º.- Fuentes inherentemente conformes.- Además de los emisores que cumplan con los parámetros estipulados en el numeral 3.11 del Decreto 195 de 2005, para los efectos del Decreto 195 de 2005 y de la presente resolución, se definen como fuentes inherentemente conformes, los emisores que emplean los siguientes sistemas y servicios, por cuanto sus campos electromagnéticos emitidos cumplen con los límites de exposición pertinentes y no son necesarias precauciones particulares:

**▪ Telefonía Móvil Celular**

(…)

Por lo tanto, estos servicios no están obligados a realizar las mediciones que trata el Decreto 195 de 2005, ni a presentar la Declaración de Conformidad de Emisión Electromagnética. Sin embargo, esto no impide al Ministerio de Comunicaciones revisar periódicamente estos valores e incluir alguno de estos servicios cuando lo crea conveniente o los niveles se superen debido a cambios en la tecnología u otros factores.»(…)”-sft-

1. Posteriormente, el Ministerio de Comunicaciones expidió la Circular 270 de 2007, en la cual estableció que los operadores de telefonía móvil *“(…) no tienen restricción alguna para instalar sus estaciones base cerca o dentro de lugares de acceso público tales como centros educativos, centros geriátricos, centros de servicio médico y zonas residenciales, y no tiene obligación de tomar mediciones de radiación por estar instalados cerca o dentro de dichos sitios, conforme la normatividad nacional y las recomendaciones internacionales”.*
2. Al respecto, mediante sentencia del 10 de febrero de 2011[[22]](#footnote-22), la Sección Primera del Honorable Consejo de Estado[[23]](#footnote-23), se pronunció sobre la relación de la instalación de las antenas de comunicaciones y los riesgos en la salud, de acuerdo a los normas reseñadas:

“(…) A los efectos de la decisión por adoptarse en este fallo, importa señalar que la Sala ya ha tenido ocasión de exponer su criterio en torno a la temática que se controvierte en el caso presente, con ocasión de una acción popular sustentada en cargos análogos a los supuestos fácticos del caso presente.[[24]](#footnote-24)  En la ocasión en cita, desvirtuó que la instalación de antenas de telefonía celular PCS en área urbana conlleve riesgo para la salubridad pública cuando los emisores emplean sistemas y servicios de telefonía móvil celular y servicios de comunicación PCS, categoría a que pertenecen las antenas de telefonía celular PCS ubicadas en la ciudad de Villavicencio objeto de controversia, habida cuenta de que los artículos 3.11 del Decreto 195 de 2005 y 3° de la Resolución 1645 de 2005 las definen como «fuentes inherentemente conformes,» precisamente, porque sus campos electromagnéticos cumplen con los límites de exposición permitidos, razón por la cual no se les exige adoptar precauciones particulares.”

1. Sin olvidar que la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional ha aplicado el principio de precaución en casos en que ha encontrado probada la relación de causalidad entre la agravación de las dolencias de una persona y las emisiones de radiaciones electromagnéticas, de donde era necesario estarse prevenido y tener en cuenta que: *(i) ante la amenaza de un peligro grave al medio ambiente o la salud, del cual (ii) no existe certeza científica, pero (iii) sí existe algún principio de certeza, (iv) las autoridades deben adoptar medidas de protección, o no pueden diferir las mismas hasta que se acredite una prueba absoluta.”[[25]](#footnote-25)*
2. Así mismo, la Alta Corte referenció un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación del en el que se señala que aunque no es posible constatar una relación directa entre afectaciones a la salud y las radiaciones no ionizantes, éstas han sido catalogadas como posiblemente carcinógenas. Al respecto la Corte[[26]](#footnote-26) ha adoptado distintas posiciones para analizar el riesgo de que representa la exposición de las personas a las ondas electromagnéticas, las cuales se concretan, de la siguiente manera:

**(…)**La**primera posición**considera que, pese a tener una clara relación con el derecho a la salud, la emisión de ondas electromagnéticas plantea una controversia relativa a las relaciones de vecindad, razón por la cual la tutela procede para obtener la protección de los derechos constitucionales fundamentales, pero sólo de manera transitoria con el fin de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. En este orden de ideas, las radiaciones son consideradas como inmisiones, por lo que el mecanismo idóneo para conseguir la defensa de los derechos de las personas afectadas por éstas, es la jurisdicción civil.

Conforme a la**segunda posición,** la radiación se encuentra ligada a los derechos colectivos al medio ambiente sano y a la salud pública. Adicionalmente considera que en estos casos se debe dar aplicación al principio de precaución, herramienta hermenéutica idónea para determinar la necesidad de intervención por parte de las autoridades públicas ante daños potenciales a dichos derechos colectivos. Así, esta teoría circunscribe la aplicación de tal principio a la protección de los derechos al medio ambiente sano y a la salud pública, de manera que, para que la tutela proceda en los casos en los que se analiza la emisión de ondas, previamente se debe verificar que se cumpla con los requisitos de procedencia de la tutela para la protección de derechos colectivos, dentro de los cuales se encuentra que la amenaza al derecho fundamental aparezca expresamente probada. Lo anterior lleva a que, en la práctica, la aplicación del principio de cautela por vía de tutela resulte casi imposible, pues si sólo se tiene un principio de certeza del peligro, el amparo es improcedente para proteger los derechos colectivos.

Finalmente, la **tercera posición** frente el tema, plantea la posibilidad de aplicar el principio de precaución para proteger el derecho a la salud de las personas expuestas a la emisión de ondas. A pesar de que la tutela no fue procedente en el caso específico, la decisión de la Corte reconoció la posibilidad de aplicar este principio en casos en los que se pretende la protección del derecho fundamental a la salud. (…)

1. De igual manera, señaló la existencia de una omisión en la regulación de este tipo de radiaciones, ya que el Decreto 195 de 2005 las excluyó de su normatividad, ni estableció los límites de ubicación de las antenas de telefonía móvil celular respecto a las viviendas, instituciones educativas, hospitales y hogares geriátricos[[27]](#footnote-27). “***Así entonces, concluyó que “teniendo en cuenta la obligación del Estado de proteger a los menores enfermos de cáncer, la Corte deberá aplicar el principio de precaución, que en el caso de esta adolescente es reforzado, y en consecuencia (i) evitar cualquier riesgo medioambiental que pueda resultar nocivo para la salud de esta adolescente, y (ii) amparar sus derechos fundamentales.”[[28]](#footnote-28)***
2. Posteriormente el Magno Tribunal adicionó[[29]](#footnote-29):

“(…) 5.3.2. La necesidad de encontrar una prueba, así no constituya evidencia científica absoluta, de la relación entre la exposición de las radiaciones y el estado de salud de los accionantes, guarda estrecha conexidad con el requisito de la existencia de peligro de daño. Si bien existen estudios internacionales, particularmente de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS, en los cuales se califica a los campos electromagnéticos como posibles cancerígenos para los seres humanos (categoría 2B)[[30]](#footnote-30), estos por sí solos no resultan suficientes para concluir en la existencia de tal nexo causal. Además, es necesario tener en cuenta las características particulares de cada caso, de modo que la afectación del estado de salud pueda resultar probada a través de estudios, exámenes, diagnósticos médicos, entre otros, que expresen los peligros a la salud del paciente y/o la necesidad de no exponerse a dichas radiaciones.

5.4. La Corte Constitucional no puede desconocer que se está en el marco del servicio público de telecomunicaciones, lo que implica la necesidad de tener en cuenta el deber del Estado de prestar - bien sea directamente o a través de particulares - de manera eficiente, regular y continua el servicio. Entonces, la necesidad de demostrar, así sea de manera indiciaria, la afectación del derecho a la salud derivado de la exposición a campos electromagnéticos, resulta de especial relevancia en tanto se podría estar afectando el interés general de contar con una correcta prestación del servicio público.

5.5. No obstante lo anterior, esta Corporación debe reiterar que en los casos en los que se compruebe la existencia del peligro del daño a la salud, debe darse aplicación al principio de precaución con el fin de proteger los derechos fundamentales de las personas, incluso por sobre el interés general representado en la prestación del servicio público de comunicaciones. (…)” resaltado fuera de texto.

1. De los preceptos normativos y jurisprudenciales, se extrae que por regla general los servicios de telefonía móvil celular se consideran que cumplen con los límites de exposición pertinentes. Sin embargo, en materia de afectación directa al derecho a la salud, deberán tomarse las precauciones necesarias.
   * 1. **LA CARENCIA DE OBJETO**
2. Con relación al fenómeno del hecho superado en acciones populares, la sección primera del Honorable Consejo de Estado, en sentencia del 27 de abril de 2016[[31]](#footnote-31), puso de presente:

“(…) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 472 de 1998, las acciones populares se “ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”, de lo cual se deduce, que la orden de proteger los derechos colectivos supone la existencia de las circunstancias que los amenazan o vulneran; **pues si éstas han desparecido, desparece también la causa que da lugar a dicha protección**. No es posible hacer cesar la amenaza o vulneración de un derecho colectivo, si éstas han dejado de existir; tampoco lo es restituir las cosas al estado anterior, en tanto que, la ausencia de dichas circunstancias, supone, precisamente, que las cosas volvieron a su estado anterior sin necesidad de la orden judicial.

Así como la prosperidad de las pretensiones en una acción popular depende de lo acreditado por la parte demandante en el proceso, **la orden de proteger los derechos colectivos sólo puede proferirse cuando, al momento de dictar sentencia, subsisten las circunstancias**, que a juicio de los actores, vulneran o amenazan tales derechos, pues de lo contrario el fundamento fáctico y jurídico de dicha orden judicial habría desparecido, y su objeto -que es, precisamente, la protección de los derechos colectivos- ya se habría logrado, generándose, de esta manera, una sustracción de materia .

Siendo ello así, si en el curso del proceso desaparecen las circunstancias que amenazan o vulneran el derecho colectivo, no es posible ordenar su protección en la sentencia, pues tal decisión sería inocua y alejada de la realidad”[[32]](#footnote-32).

1. De otro lado, dicha Sección ilustró:

*“(…) la carencia de objeto por haberse superado el hecho vulnerador que originó la acción, se da cuando se comprueba que entre la presentación de ésta y el momento de dictar el fallo cesó la amenaza o vulneración del derecho cuya protección se había solicitado y, en tal circunstancia, ya no será necesaria la orden de protección, pero en todo caso, debe el juez declarar que la mencionada amenaza o vulneración existió pero desapareció”[[33]](#footnote-33)*.

1. En este orden, se debe analizar en el caso sub exámine se produce la carencia de objeto por hecho superado.
   1. **ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.**
2. Como fundamento en la demanda de acción popular la parte actora estimó vulnerados a los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas, a la prevención de desastres previsibles técnicamente, a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, derechos de los consumidores y usuarios, comoquiera que denuncia que la adecuación para la instalación de la antena de telecomunicaciones en el barrio Malhabar no cumple con las normas urbanísticas y representan un peligro inminente en la salud de los habitantes del sector.
3. La Sala considera que la comunidad del barrio Malhabar fueron presentadas diferentes quejas ante las entidades demandadas, por el intento de adecuación de una antena de telecomunicaciones por la Sociedad COMCEL SA bajo la marca CLARO, en una vivienda del barrio, por la presunta afectación a la salud de los habitantes.
4. La Secretaría de Planeación del Municipio de Manizales mediante oficio del 1 de abril de 2014, expidió concepto de viabilidad para la instalación de una Estación Base, solicitada por Asesores Externos de Comcel S.A.; sin embargo al observar por parte del Grupo de Control Físico Urbanístico, una presunta infracción de la norma urbanística en el inmueble vinculado a la instalación de la antena, le fue suspendido el concepto de viabilidad, por no contar con la licencia urbanística de construcción que autorice la modificaciones arquitectónicas y estructurales del predio en cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto 1469 de 2010 y 195 de 2005. . (fl. 21-23, 150 C1).
5. Por su parte la Sociedad Comcel S.A., en la contestación de la demanda precisó que en la dirección señalada no opera ninguna antena de telecomunicaciones de su propiedad.
6. Dicha información fue confirmada por la Apoderada Judicial de la Sociedad en la audiencia de pacto de cumplimiento celebrada el 27 de febrero del año avante, en la cual indicó que si bien se inició el proceso para su instalación, fue desistido teniendo en cuenta la oposición presentada por la comunidad del sector. (cd. Grabación 2 Minutos 2:35 a 3:45)
7. En el anterior contexto fáctico y probatorio, es claro para la Sala que en el presente asunto, aparece acreditado la configuración del fenómeno relacionado con la carencia actual de objeto por hecho superado, sin perjuicio que se pueda presentar una nueva acción popular, y se declarará probada esta excepción propuesta por COMCEL SA.
8. No habrá lugar a condena en costas porque no se dan las exigencias del artículo 38 de la ley 472 de 1998.
9. Por lo anteriormente expuesto, **esta Sala de Decisión del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CALDAS, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,**

# SENTENCIA:

**PRIMERO: NO DECLARAR** probada la excepción de falta de legitimación por pasiva formulada por la AERONÁUTICA CIVIL.

**SEGUNDO:DECLARAR** probada la excepción de hecho superado propuesta por COMCEL SA, y por ende, la carencia de objeto de conformidad con lo expuesto en la parte motiva la presente providencia.

**TERCERO:** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, REMITASE copia auténtica de ésta decisión a la Defensoría del Pueblo.

**CUARTO: SIN COSTAS** en esta instancia.

**QUINTO:** En caso de interposición de solicitud de Revisión, remítase el proceso inmediatamente al Honorable Consejo de Estado.

**SEXTO:** Una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.

### Notifíquese y Cúmplase

Los Magistrados,

**JAIRO ÁNGEL GÓMEZ PEÑA**

**PUBLIO MARTÍN ANDRES PATIÑO MEJÍA**

**Ponente**

1. <http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0472_1998.html#4> [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr003.html#133> [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC486.doc> [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr007.html#301> [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0472_1998.html#16> [↑](#footnote-ref-5)
6. **Artículo** **16.***Requisitos únicos para la instalación de estaciones radioeléctricas en telecomunicaciones.* En adelante para la instalación de Estaciones Radioeléctricas para aquellos que operen infraestructura de telecomunicaciones, y para los trámites, que se surtan ante los diferentes entes territoriales, se deberá relacionar la siguiente información: (…) Parágrafo 1°. Los procedimientos que conforme a las normas vigentes deben surtirse ante el Ministerio de Comunicaciones, cuando se refiera al uso del espectro electromagnético; la Aeronáutica Civil de Colombia, en cuanto al permiso de instalación de Estaciones Radioeléctricas; el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o las Corporaciones Autónomas Regionales, cuando se requiera licencia, permiso u otra autorización de tipo ambiental; y ante los curadores urbanos y las Oficinas de Planeación de los Municipios y Distritos para las licencias de construcción y/o de ocupación del espacio público, en su caso, serán los únicos trámites para la instalación de Estaciones Radioeléctricas de Telecomunicaciones. <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15860> [↑](#footnote-ref-6)
7. fs. 17- 18 vto, 39 a 48 vto, 63- 64 vto, 66-67 vto, 69 – 70 vto C1 [↑](#footnote-ref-7)
8. PETIT, Eugenio. (1970). Tratado elemental de derecho romano. Buenos Aires: Albatros. [↑](#footnote-ref-8)
9. <http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil.html> [↑](#footnote-ref-9)
10. <http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica> [↑](#footnote-ref-10)
11. <http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0472_1998.html> [↑](#footnote-ref-11)
12. CORTE CONSTITUCIONAL, “Sentencia C – 377 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández”. <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-377-02.htm> [↑](#footnote-ref-12)
13. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO, Bogotá, D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil diez (2010), Radicación número: 54001233100020010192001(AP) <http://181.57.206.10/SENTPROC/F54001233100020010192001PARAADJUNTARSENTENCIA20110117154024.doc> [↑](#footnote-ref-13)
14. <http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica> [↑](#footnote-ref-14)
15. Ley 37 de 1993 de enero de 2006,

    <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=290> [↑](#footnote-ref-15)
16. <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1458> [↑](#footnote-ref-16)
17. <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36913> [↑](#footnote-ref-17)
18. <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39477> [↑](#footnote-ref-18)
19. <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297> [↑](#footnote-ref-19)
20. <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15860> [↑](#footnote-ref-20)
21. <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17461> [↑](#footnote-ref-21)
22. CONSEJO DE ESTADO, Sala De lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera ponente: María Claudia Rojas Lasso, diez (10) de febrero de dos mil once (2011), Radicación número: 50001-23-31-000-2004-00521-01 (AP).

    <http://181.57.206.10/SENTPROC/F50001233100020040052101PARAADJUNTARSENTENCIA20110210154241.doc> [↑](#footnote-ref-22)
23. # Corte Constitucional sentencia T- 299 de 2008 del 3 de abril de 2008, MP. Dr. Jaime Córdoba Triviño. <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-299-08.htm>

    [↑](#footnote-ref-23)
24. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 17 de julio de 2008, Consejero ponente: Camilo Arciniegas Andrade, Exp. 41001-23-31-000-2003-01265-01. [↑](#footnote-ref-24)
25. Corte Constitucional sentencia T-701 de 2014, MP. Mauricio González Cuervo, septiembre 15 de 2014. <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-701-14.htm> [↑](#footnote-ref-25)
26. Corte Constitucional sentencia T- 1077de 2012, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, diciembre 12 de 2012. <http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/T-1077-12.htm> [↑](#footnote-ref-26)
27. T-1077 de 2012 [↑](#footnote-ref-27)
28. Ver cita 26 [↑](#footnote-ref-28)
29. Corte Constitucional sentencia T- 704 de 2014, MP. Mauricio González Cuervo, septiembre 15 de 2014. [↑](#footnote-ref-29)
30. Cita dela cita: Puede ser consultado en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/es/ [↑](#footnote-ref-30)
31. CONSEJO DE ESTADO, Sala De lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés, veintisiete (27) de abril de dos mil dieciseis (2016), Radicación número: 68001-23-31-000-2010-00913-01. <http://181.57.206.10/SENTPROC/F68001233100020100091301PARAADJUNTARSENTENCIA20160602152555.doc> [↑](#footnote-ref-31)
32. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 12 de febrero de 2004, Radicación No. 19001-23-31-000-2002-1700-01(AP), Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez. [↑](#footnote-ref-32)
33. Cita de la cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 29 de agosto de 2013, Radicación No. 25000-23-24-000-2010-00616-01(AP), Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. [↑](#footnote-ref-33)